



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 04180-2014-PA/TC

LIMA

BEATRIZ ARENAS ALVARADO

## AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 24 de junio de 2016

**VISTO**

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Beatriz Arenas Alvarado contra la resolución de fecha 20 de marzo de 2014, de fojas 1315, expedida por la Sexta Sala Civil de Lima declarando improcedente la solicitud de ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 01460-2009-PA/TC.

### ATENDIENDO A QUE

1. Mediante resolución de fojas 1016, la Sexta Sala Civil de Lima declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por doña Beatriz Arenas Alvarado, en el extremo en que cuestionó la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura de no ratificarla en el cargo de magistrada del Poder Judicial y ordenó que dicha institución la convoque a un nuevo proceso de ratificación, declarando improcedente la demanda en cuanto solicitó su reincorporación en el cargo. Con fecha 15 de junio de 2010, este Tribunal, a través de la sentencia recaída en el Expediente 01460-2009-PA/TC, declaró fundada demanda en el extremo que fue materia del recurso de agravio constitucional, y ordenó que el Consejo Nacional de la Magistratura la reincorpore en el cargo de juez titular del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Breña, Pueblo Libre y Jesús María, de la Corte Superior de Justicia de Lima, reconociéndosele todos los derechos inherentes al cargo.
2. Por Resolución 470-2010-PCNM (fs. 1176), el Consejo Nacional de la Magistratura resolvió reincorporar a doña Beatriz Arenas Alvarado en el cargo de juez titular del Quinto Juzgado de Paz Letrado de Lince y San Isidro del Distrito Judicial de Lima, en razón de que el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Breña, Pueblo Libre y Jesús María estaba a cargo de un juez titular, y dispuso la expedición de nuevo título de nombramiento para la recurrente.
3. Mediante escrito de fojas 1214, la actora solicitó que el Consejo Nacional de la



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 04180-2014-PA/TC

LIMA

BEATRIZ ARENAS ALVARADO

Magistratura de cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 01460-2009-PA/TC, en el sentido de retrotraer su proceso de ratificación por el periodo 1993-2001. Fundó el pedido alegando que dicha institución la habría sometido a un nuevo proceso de ratificación por el periodo comprendido desde el año 2006 hasta la fecha de culminación de ese proceso, período diferente al ordenado por el Tribunal Constitucional, no habiéndola ratificado. Aduce que en ese proceso se le aplicó el reglamento vigente a la fecha en que se realizó el mismo, y no el reglamento vigente el año 2001, fecha en que habrían sido violados sus derechos fundamentales. Finalmente, señala que la entrevista personal solo versó sobre hechos aislados.

4. El procurador público de la demandada absolvió el pedido señalando que la Resolución 688-2012-PCNM, de fecha 25 de octubre de 2012, ha dado cumplimiento a lo ordenado por la sentencia del Tribunal Constitucional pues se encuentra debidamente motivada y con audiencia previa de la recurrente. Asimismo, sostiene que el periodo de evaluación considerado ha sido el comprendido entre el 31 de diciembre de 1993 hasta el 25 de mayo del 2001 y el comprendido entre el 15 de diciembre de 2006 hasta la conclusión del proceso de evaluación, conforme consta en la referida resolución.
5. El Cuarto Juzgado Civil de Lima, mediante resolución 21 (fs. 1279), declaró improcedente la solicitud de la recurrente por considerar que en realidad lo que pretendía era que el juzgador se pronuncie sobre la forma en que se llevó a cabo su entrevista personal, buscando cuestionar su no ratificación en el cargo de juez titular del Quinto Juzgado de Paz Letrado de Lince y San Isidro. Asimismo, indicó que por resolución 16 se declaró concluido el proceso y por resolución 18 se precisó que la sentencia se había cumplido en sus propios términos.
6. A su turno, la Sala revisora, mediante resolución N° 3 (fs. 1315) confirmó la resolución número 21 por similares fundamentos.
7. En el recurso de agravio constitucional (fs. 1323) la recurrente reitera sus argumentos de que en el nuevo proceso de ratificación a que fue sometida se le aplicó un reglamento que no le correspondía y que aun no había cumplido los 7 años para pasar por ese proceso; agrega que la entrevista personal se basó en hechos ajenos a los que eran materia de ratificación y que la Resolución 688-2012-PCNM no habría sido debidamente motivada.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 04180-2014-PA/TC

LIMA

BEATRIZ ARENAS ALVARADO

8. En la resolución emitida en el expediente N° 00201-2007-Q/TC, de fecha 14 de octubre de 2008, este Tribunal dejó señalado que

sobre la base de lo desarrollado en la RTC 0168-2007-Q/TC, este Colegiado considera que de manera excepcional puede aceptarse la procedencia del RAC cuando se trata de proteger la ejecución en sus propios términos de sentencias estimatorias emitidas en procesos constitucionales, tanto para quienes han obtenido una sentencia estimatoria por parte de este Colegiado, como para quienes lo han obtenido mediante una sentencia expedida por el Poder Judicial.

La procedencia excepcional del RAC en este supuesto tiene por finalidad restablecer el orden jurídico constitucional, correspondiendo al Tribunal valorar el grado de incumplimiento de las sentencias estimatorias expedidas por el Poder Judicial cuando éste no cumple dicha función, devolviendo lo actuado para que la instancia correspondiente dé estricto cumplimiento a lo declarado por el Tribunal. Asimismo, los órganos jurisdiccionales correspondientes se limitarán a admitir el recurso de agravio constitucional, teniendo habilitada su competencia este Colegiado, ante la negativa del órgano judicial, a través del recurso de queja a que se refiere el artículo 19 del Código Procesal Constitucional.

9. En el caso de autos, tal como ha sido planteado el recurso de agravio constitucional, se evidencia que el mismo en realidad no busca la correcta ejecución de la sentencia recaída en el Expediente 01460-2009-PA/TC, que fue cumplida mediante Resolución 470-2010-CNM (fs. 1176) a través de la cual el Consejo Nacional de la Magistratura ordenó la reposición de la recurrente en el cargo de magistrada del Poder Judicial; por el contrario, lo realmente pretendido es que se declare nula la Resolución 688-2012-PCNM, de fecha 25 de octubre de 2012, mediante la cual el Consejo Nacional de la Magistratura dispuso su no ratificación en el marco de un nuevo proceso de ratificación, lo que constituye un requerimiento ajeno a la ejecución de lo dispuesto en la citada sentencia del Tribunal Constitucional. Más aun, la sentencia de segunda instancia (fs. 1016) únicamente ordenó que la actora fuese sometida a un nuevo proceso de ratificación, sin hacer precisión alguna a la forma ni al reglamento bajo cuyos parámetros debía efectuarse, por lo que el cuestionamiento a los resultados de ese nuevo proceso no es posible hacerlo mediante el recurso de agravio a favor del cumplimiento de las sentencias.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 04180-2014-PA/TC

LIMA

BEATRIZ ARENAS ALVARADO

confiere la Constitución Política del Perú, con el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera y el voto singular del magistrado Blume Fortini que se agregan,

**RESUELVE**

Declarar **IMPROCEDENTE** el recurso de agravio constitucional.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES  
LEDESMA NARVÁEZ  
URVIOLA HANI  
RAMOS NÚÑEZ  
SARDÓN DE TABOADA  
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Lo que certifico:

JANET OTÁROLA SANTILLANA  
Secretaria Relatora  
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 04180-2014-PA/TC

LIMA

BEATRIZ ARENAS ALVARADO

### **FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA**

Coincidiendo con el sentido de lo resuelto por mis colegas me permito señalar lo siguiente:

1. Sin duda alguna una preocupación central de quien imparte justicia en general, y de este Tribunal Constitucional en particular, es la de asegurar el cumplimiento de sus decisiones. En ese sentido, el Código Procesal Constitucional en sus artículos 22 (referido al régimen general aplicable a los procesos de tutela de derechos fundamentales) y 59 (destinado a la regulación del proceso de Amparo) revela el interés del legislador por otorgar real eficacia a las resoluciones de los jueces y juezas constitucionales. Para ello, optan por un modelo en el cual el juez o jueza de primer grado es el (a) ejecutor (a) de lo resuelto.
2. Ahora bien, y ante la constatación de que las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional peruano seguían siendo incumplidas, cumplidas deficientemente o desnaturalizadas en su fase de ejecución, este Tribunal instauró el denominado "recurso de agravio a favor del cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional", con carácter de jurisprudencia constitucional conforme al artículo VI del Título Preliminar, desde lo dispuesto en la RTC 00168-2007-Q/TC.
3. Luego, y mediante la RTC 00201-2007-Q/TC, este Tribunal amplió la posibilidad de presentar el recurso de agravio incluso a favor de la ejecución de sentencias del Poder Judicial emitidas en segundo grado. Finalmente, y también como doctrina jurisprudencial, el Pleno del Tribunal Constitucional peruano creó el "recurso de apelación por salto" como medio para intentar mejorar la ejecución de sus propias decisiones participando directamente para hacer cumplir sus pronunciamientos cuando éstos no vienen siendo adecuadamente ejecutadas por el juez o jueza de ejecución de primer grado sin necesidad de que conozca la Sala de la judicatura ordinaria que debería haberse pronunciado en segundo grado.
4. En realidad, cabe preguntarse si la generación de este tipo de mecanismos (recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional, recurso de agravio a favor de la ejecución de sentencias del Poder Judicial emitidas en segundo grado, recurso de agravio a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional) cuentan con una cobertura constitucional y legal suficiente, muy independientemente de sus loables intenciones. También cabe preguntarse si éste puede ser considerado un ejercicio de su autodenominada autonomía procesal constitucional, concepto



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 04180-2014-PA/TC

LIMA

BEATRIZ ARENAS ALVARADO

sobre cuyos alcances por cierto conviene conversar. Por último, conviene pronunciarse si en mérito a la propia estructura del Tribunal Constitucional peruano, los procesos que allí se atienden y lo que implica materializar las sentencias ya emitidas, este Alto Tribunal cuenta con la debida capacidad operativa para atender eficientemente ese tipo de requerimientos.

5. Adelantando algo de esa discusión, convendría señalar que si bien es cierto que el ejercicio de las competencias explícitas e implícitas de un Tribunal Constitucional puede reivindicar ciertas funciones y potestades para sí, aunque no se encuentran expresamente reconocidas para él, siempre y cuando se encuentren dentro de lo "constitucionalmente necesario", y no, como alegan algunos, de lo "constitucionalmente posible". Señalo esto en mérito a que considero que, en estricto respeto a una separación de funciones y un criterio de corrección funcional, el Tribunal Constitucional peruano debe entender que en rigor a quien corresponde diseñar o mejorar los diferentes procesos constitucionales existentes es el legislador, máxime si se toma en cuenta la referencia a una reserva de Ley orgánica establecida en el artículo 200 de nuestra Constitución.
6. Lo recientemente señalado, por cierto, no debe llevar al inmovilismo de un Tribunal Constitucional, cuya labor es precisamente la de defender y promover la fuerza normativa de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos, labor que, por cierto, implica resolver conforme a Derecho, inclusive muy a despecho de los vacíos o insuficiencias que pueda presentar el ordenamiento jurídico vigente del país donde le toca actuar.
7. Estamos pues ante materias sobre las cuales se hace necesario conversar, y evaluar lo decidido en su momento por anteriores composiciones de este Tribunal, máxime cuando se aprecia cuál es la actual formulación de medios como el recurso de la apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional, o el recurso de agravio a favor de la ejecución de sentencias del Poder Judicial emitidas en segundo grado, o el recurso de agravio a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional.
8. En síntesis: en tanto y en cuanto éstas son las actuales pautas establecidas, y su constitucionalidad no ha sido formalmente cuestionada, todavía seguirán existiendo pronunciamientos en función a mecanismos como la apelación por salto tal como hoy se encuentran concebidas. Sin embargo, resulta indispensable analizar si lo ahora previsto permite una participación del Tribunal Constitucional peruano que, sin romper los parámetros constitucional o legalmente necesarios y su real capacidad operativa, asegura el cabal



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 04180-2014-PA/TC

LIMA

BEATRIZ ARENAS ALVARADO

cumplimiento de sus propias sentencias de manera debidamente coordinada con otras entidades estatales y contando con los apremios necesarios para garantizar su efectiva materialización.

S.

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

*Ray Espinosa Saldaña*

Lo que certifico:

*Janet Otárola Santillana*

JANET OTÁROLA SANTILLANA  
Secretaria Relatora  
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL





TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 04180-2014-PA/TC

LIMA

BEATRIZ MERCEDES ARENAS ALVARADO

**VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI,  
OPINANDO QUE LO QUE CORRESPONDE ES DECLARAR EJECUTADA EN  
SUS PROPIOS TERMINOS LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL DEL  
RECURRENTE, CONCLUIDO EL PROCESO Y DISPONER EL ARCHIVO  
DEFINITIVO DE LOS ACTUADOS, Y NO EMITIR PRONUNCIAMIENTO  
ALGUNO SOBRE EL RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL**

Con el debido respeto por mis colegas Magistrados, discrepo de la parte resolutive del auto de mayoría, en cuanto señala: “Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional”, pues a mi juicio, lo que corresponde es declarar que la sentencia constitucional emitida a favor de la recurrente se ha ejecutado en sus propios términos, por lo que habiendo concluido el proceso, debe disponerse el archivo definitivo de los actuados; y no emitir pronunciamiento alguno sobre el recurso de agravio constitucional, cuya concesión habilitó la intervención del Tribunal Constitucional.

Considero que no corresponde emitir tal pronunciamiento en el sentido acotado por las siguientes razones:

1. El recurso de agravio constitucional es un medio impugnatorio que persigue la revisión de la resolución (sentencia o auto) que deniega en segunda instancia una pretensión de tutela de derechos fundamentales, que declara infundada o improcedente la demanda; exclusivo de los procesos constitucionales de la libertad.
2. En tal sentido, una vez interpuesto este medio impugnatorio, cumplidos los requisitos correspondientes y concedido el mismo, se habilita la competencia jurisdiccional del Tribunal Constitucional para conocer, evaluar y resolver la causa, sea por el fondo o por la forma, y emitir pronunciamiento respecto de la resolución impugnada para anularla, revocarla, modificarla, confirmarla o pronunciarse directamente sobre la pretensión contenida en la demanda.
3. Sobre esto último, Monroy Gálvez sostiene que la impugnación “es la vía a través de la cual se expresa nuestra voluntad en sentido contrario a una situación jurídica establecida, la que pretendemos no produzca o no siga produciendo efectos jurídicos”<sup>1</sup>.

En tal sentido, a mi juicio, una vez admitido un recurso de agravio constitucional, lo que corresponde es resolver la causa expresando una decisión sobre la resolución (auto o sentencia) impugnada.

<sup>1</sup> MONROY GÁLVEZ, Juan: “Apuntes para un estudio sobre el recurso de casación en el proceso civil peruano”, en *Revista Peruana de Derecho Procesal*, N° 1, Lima, septiembre 1997, p. 21.





TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 04180-2014-PA/TC

LIMA

BEATRIZ MERCEDES ARENAS ALVARADO

4. El recurso de agravio constitucional no una pretensión en sí, figura propia del instituto procesal de la demanda, pues, como bien se sabe, esta última, además de ser el vehículo procesal a través del cual se materializa el derecho de acción, contiene una pretensión o petitorio (referido a un conflicto de intereses o a una controversia jurídica), que es puesto a conocimiento de la judicatura, para procurar una solución judicial.
5. Confundir un medio impugnatorio con una pretensión o petitorio de demanda no resulta de recibo, ni menos se compadece con el significado de conceptos procesales elementales.
6. Si bien es cierto que en el presente caso nos encontramos ante un recurso de agravio constitucional atípico planteado en la etapa de ejecución de sentencia, no es menos cierto que, una vez concedido este y elevados los actuados al Tribunal Constitucional, lo que corresponde es el análisis de la resolución materia de impugnación y no del recurso mismo. Es decir, la revisión de la resolución judicial de la instancia inferior que ha sido impugnada para emitir un pronunciamiento sobre la misma, para determinar si es armónica y concordante con el cumplimiento de la sentencia supranacional que se viene ejecutando.
7. Por ello, en el caso de este recurso de agravio constitucional atípico, el eje de evaluación no varía, aun cuando el cuestionamiento se plantee en la etapa postulatoria o en la etapa de ejecución de una sentencia constitucional, pues desde mi perspectiva, la decisión que debe adoptarse esta referida a la resolución impugnada, confirmándola, revocándola o anulándola según corresponda.
8. Ello sin perjuicio que la regulación de este medio impugnatorio atípico se haya establecido directamente por el Tribunal Constitucional y no haya sido desarrollado en su jurisprudencia, ya que ello no implica desconocer categorías procesales básicas ni caer en una mala práctica procesal pronunciándose sobre la fundabilidad o infundabilidad del recurso o la doble calificación de procedencia del recurso.

S.

BLUME FORTINI

Lo que certifico:

JANET OTÁROLA SANTILLANA  
Secretaria Relatora  
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL